

Democratización y cultura política en El Salvador

Luis Armando González¹
Centro de Información, Documentación
y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA)
pp. 309-313

En 1992 se abrió, para El Salvador, un abanico de posibilidades políticas, favorables a la construcción de un ordenamiento democrático, el cual, poco a poco, se cerró. A estas alturas, después de catorce años de finalizada la guerra civil, la incertidumbre se ha convertido en la característica más sobresaliente del proceso sociopolítico salvadoreño. En esos catorce años, se han cometido múltiples desatinos. Dos de los más importantes son la incapacidad para edificar un entramado institucional sólido, capaz de sostener un Estado democrático de derecho y la incapacidad para forjar una cultura política a tono con las exigencias básicas de la democracia, esto es, una cultura política democrática.

Pues bien, sobre la situación de la democracia en El Salvador se han escrito, desde 1992, cientos de páginas. Del conjunto de análisis y reflexiones se desprende un conjunto de tesis, que se resumen a continuación. Después, se relacionarán con el problema de la cultura política predominante en el país. Vayamos, entonces, a las tesis básicas sobre el proceso de democratización.

Primera tesis: *los pasos iniciales en la democratización se comenzaron a dar en 1982, cuando se convocó a elecciones para asamblea constituyente*. Desde entonces, ha habido una secuencia ininterrumpida de elecciones, las cuales han establecido y renovado a los principales mandatos políticos. Se trató, sin embargo, de tan solo unos primeros pasos pues, a lo largo de esa década, la guerra civil dominó el conjunto de la vida nacional y subordinó el juego electoral a su lógica, al mismo tiempo que excluyó de la dinámica política legal a actores clave para avanzar en la democratización. En concreto, el FMLN, la principal fuerza de oposición de ese entonces —y también en la actualidad— se hallaba fuera de la legalidad, en la búsqueda, con la armas en la mano, del control total del poder político.

1. Director del CIDAI. Dirección electrónica: luisg@cidai.uca.edu.sv

Segunda tesis: *el año de 1992 marca un punto de inflexión en el proceso político salvadoreño*. La negociación que puso fin a la guerra permitió que el actor más importante de oposición, hasta entonces un ejército guerrillero fuera de la ley, se convirtiera en un partido político, con iguales derechos que el resto de partidos establecidos. La inclusión formal del FMLN en el sistema de partidos, no solo hizo realidad el pluralismo político, sino también el pluralismo ideológico, puesto que el nuevo partido no abandonó sus compromisos ideológicos fundamentales, legalmente reconocidos. Desarmado el FMLN y convertido en partido político, el pluralismo político e ideológico se hizo realidad en un sentido novedoso para la historia salvadoreña del siglo XX. Antes de 1992 —y desde los años de 1930—, la corriente ideológica y política expresada por el FMLN siempre había estado al margen de la legalidad.

Tercera tesis: *con la firma de los acuerdos de paz (1992) se apuntaló el proceso de transición hacia la democracia que, de resultar exitoso, debía dar paso a un subsiguiente proceso de consolidación democrática*. La transición debía permitir establecer los mínimos necesarios, políticos e institucionales, para dar el siguiente paso, es decir, la concreción de un entramado institucional sólido, que sirviera de fundamento a un Estado democrático de derecho. Solo con esta lógica tenía sentido haber terminado la guerra, por la vía negociada; solo en ese horizonte normativo —construir una sociedad democrática— se comprendían las renunciaciones del momento, así como la certeza de que se apostaba por algo en verdad importante.

Cuarta tesis: *la transición se agotó a finales de la década de los años noventa, sin establecer los mínimos necesarios para avanzar hacia la consolidación*. Las elecciones periódicas e ininterrumpidas, con todo y ser importantes en la transición, no la agotan, pues deben estar acompañadas por el reconocimiento de los derechos de los adversarios políticos, de niveles de participación social significativos —en las elecciones y fuera de ellas—, de la

erradicación de las prácticas autoritarias, del respeto a la legalidad, por parte de todos los actores sociopolíticos, y de la vigencia de un orden institucional básico. A finales de los años noventa, el saldo del proceso político salvadoreño, en esos y otros temas, era más bien negativo. Lo más notorio —y a la vez lo más grave— era la debilidad institucional. Cuando se cumplieron diez años de firmada la paz, en 2002, los avances institucionales —en los planos judicial, de transparencia, legalidad política, respeto a los derechos humanos— dejaban mucho que desear. Fue con esos déficit que se encaró el nuevo milenio. Para muchos, hablar de transición se volvió —se ha vuelto— anacrónico; pero tampoco se puede hablar de consolidación democrática.

Quinta tesis: *una transición incompleta no llevó a la consolidación democrática, sino a un ordenamiento sociopolítico, en el cual los niveles mínimos de democracia alcanzados son permanentemente amenazados por prácticas autoritarias de diferente signo, la violencia social y el deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población*. La pobreza y la exclusión, junto con la violencia, se han sumado al deterioro institucional, a la discrecionalidad en la toma de decisiones gubernamentales y a los abusos de poder, los cuales han socavado los logros democráticos alcanzados y han impedido, en la misma medida, avances ulteriores, en materia de democratización. Al calor de estas amenazas, la corrupción ha proliferado en las altas esferas del Estado, dando al traste con la hipótesis, sostenida por muchos, cuando ARENA desplazó al Partido Demócrata Cristiano del poder ejecutivo, en 1989, que la llegada del “partido de los ricos” al poder estatal, la corrupción se detendría. No ha sido así. Con ARENA, la corrupción corroe las instituciones del Estado hasta niveles indecibles, sin que se vislumbren medidas efectivas de contraloría, de transparencia y de rendición de cuentas, con las cuales hacer frente a semejante mal.

Sexta tesis: *la democratización del país ha encontrado un fuerte obstáculo en el*

maridaje existente entre ARENA —que detenta el control del poder ejecutivo desde 1989— y un privilegiado grupo de empresarios, vinculados al sector financiero. En virtud de ese maridaje, las políticas estatales fundamentales —económicas y sociales— han tenido como finalidad expresa favorecer los intereses de las familias cuyos capitales están concentrados en las finanzas, el comercio y los servicios, por medio del ajuste estructural, la reducción del Estado, las privatizaciones, la dolarización, los tratados de libre comercio, etc. La riqueza de este grupo ha crecido de forma significativa, desde el gobierno de Cristiani. Son los (nuevos) “ricos más ricos” de El Salvador. Se trata de la oligarquía financiera y comercial que, aunque ha remplazado a la vieja oligarquía cafetalera, comparte con ella una visión de país como una gran hacienda, en la cual todo —la riqueza, la mano de obra y las tierras— pertenece a las familias oligarcas.

Octava tesis: *otro obstáculo para la democratización ha sido la polarización, en concreto, la existente entre ARENA y el FMLN, la cual ha marcado la dinámica política desde 1994.* En el marco de esa polarización, a la cual se han sumado los demás partidos, no solo la descalificación del rival ha sido la regla básica del comportamiento político, sino que no ha sido posible establecer consensos políticos básicos sobre los problemas fundamentales de la sociedad. Asimismo, la polarización más grave —la que divide al país en dos: los ricos muy ricos y la mayoría pobre— no ha encontrado eco en el ámbito político. Así las cosas, la amenaza de la ingobernabilidad es más fuerte que en otras fases del proceso político nacional, debido al deterioro institucional y a la polarización política y social. Las tensiones sociales son cada vez menos manejables por el gobierno; las demandas sociales son cada vez más organizadas, públicas y, en muchos casos, violentas; y han proliferado espacios territoriales y prácticas sociales ilegales no controladas por el gobierno. Dicho de otro modo, en la posguerra, se ha profundizado el divorcio entre sociedad y política. Es decir, la po-

lítica (los partidos, la Asamblea Legislativa, etc.) posee unos ritmos que no son los de la sociedad, lo cual hace que esta no encuentre en aquella una respuesta a sus múltiples demandas. Por un lado, los ritmos de la política son los ritmos del poder conseguido a través de elecciones; por el otro, los de la sociedad son los de la supervivencia a cualquier precio. Mientras que desde la política no se mire más que el poder, la sociedad no tendrá el lugar que le corresponde en el quehacer político, lo cual se traducirá en mayor desconfianza ciudadana hacia las instituciones, menos respeto a la legalidad y más deterioro en la convivencia social.

En resumen, en el tema de la democracia, catorce años después de finalizada la guerra civil, el país arroja un saldo negativo. Los pocos logros conseguidos —tal como se puso de manifiesto en las recientes elecciones de alcaldes y diputados— no dejan de estar permanentemente amenazados por las asechanzas del autoritarismo, el fanatismo y la violencia.

A la par de estas deficiencias, en materia de democratización, ha surgido otra deficiencia que, aunque menos notoria, también es un gran obstáculo para la construcción de un ordenamiento democrático: el débil afianzamiento en la población, cuando no ausencia declarada, de valores, opciones y creencias democráticas. Es decir, no se ha forjado una cultura política democrática, sino que más bien prevalece una cultura política alimentada por valores autoritarios, heredados de un pasado histórico marcado por la prepotencia y los abusos de oligarcas y militares.

En la actualidad, quienes concentran el poder económico —y sus portavoces políticos— agregan la ostentación sin límites a la prepotencia heredada del pasado. Esa prepotencia y esa ostentación —cobijada esta última por el emblema del éxito— se irradian hacia la sociedad, a través de unos medios de comunicación obsequiosos con los poderosos y deseosos de vender a la población un mundo de fantasía. Quienes no tienen poder económico y político, además de sumisión, ausencia de crítica y respeto a las

jerarquías, añaden el conservadurismo religioso, el consumismo envidioso, las ansias del éxito fácil y la propensión a la violencia. Hay, sin duda, excepciones. Pero, en su mayoría, los salvadoreños y salvadoreñas no han cultivado (ni cultivan), en su subjetividad individual y en sus relaciones intersubjetivas, los valores, las opciones y las creencias democráticas básicas.

La capacidad para valorar críticamente a quienes ejercen el poder es propia de un reducido sector minoritario; la disposición a ejercer (y a hacer valer) los derechos ciudadanos fundamentales no es generalizada; la sumisión a los poderosos (a quienes se considera superiores y, por ello, dotados de capacidades de mando excepcionales) sigue presente en los más; ver a los débiles, a los excluidos y a los marginados como fracasados y perdedores se ha convertido en una norma para buena parte de la población; una gran mayoría ha hecho de la violencia y del irrespeto a las leyes un hábito; y solo unos pocos han hecho suyos valores como la tolerancia, el respeto a la dignidad de los otros y la solidaridad con los más débiles.

En parte, esa cultura política —no democrática, pero fuertemente autoritaria— ayuda a explicar las inclinaciones electorales de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Distintos análisis y reflexiones a lo largo de la posguerra llegan a una conclusión preocupante: la mayor parte de la población en edad de votar lo hace por un partido que ha propiciado un modelo económico excluyente y marginalizador, es decir, por un partido que ha tomado decisiones contrarias a sus intereses fundamentales. Identificada esa situación, sin duda grave para quienes creen que los salvadoreños y las salvadoreñas merecen una vida más digna, el desafío consiste en indagar cuáles son los factores que pueden ayudar a explicarla. Se trata, como ya se apuntó, de factores de tipo cultural. En realidad, a ARENA —y a lo que el partido es y simboliza— no le viene bien una cultura política democrática, sino que prefiere una de tipo

autoritario y neopopulista, es decir, una cultura conservadora e intolerante, respetuosa de las jerarquías, animadora de las soluciones de fuerza y generadora de hábitos consumistas y prosaicos. ARENA obtiene sus mayores réditos políticos de este tipo de cultura. Por eso, este partido —con la ayuda de los grandes medios de comunicación y algunos líderes religiosos influyentes— la promueve en los diferentes ámbitos (religiosos, deportivos, artísticos) de la vida social.

En este punto, cabe mencionar uno de los estudios más recientes (y más rigurosos) sobre la cultura política prevaleciente en El Salvador: *La cultura política de la democracia en El Salvador, 2004*². Este estudio concluye que, pese a la preferencia que la mayoría de los entrevistados dice tener por la democracia como forma de gobierno (63.3 por ciento), al interrelacionar las variables “apoyo al sistema” y “tolerancia”, solo el 32 por ciento apoya la democracia estable, mientras que el resto se inclina por la estabilidad autoritaria (35 por ciento), la democracia inestable (17 por ciento) y el rompimiento democrático (16 por ciento). Asimismo, cabe destacar la profunda desconfianza en las instituciones y los partidos políticos, la marcada satisfacción con el sistema actual de gobierno, lo cual no puede ser leído sin más como un apoyo a la democracia, el aumento de la intolerancia política, entre 1995 y 1999, y los bajos niveles de participación ciudadana.

Aunque el estudio no lo dice de forma expresa, sí sugiere que la cultura política predominante en El Salvador tiene severas limitaciones para convertirse en una cultura política democrática y, en consecuencia, para propiciar comportamientos políticos acordes con las exigencias de la democracia, es decir, más críticos y menos dóciles con el poder. Se trata, a nuestro juicio, de una conclusión que, de ser cierta, debe llevarnos a discutir con seriedad los posibles mecanismos para propiciar una cultura política distinta (más aún, opuesta) a la cultura política predominante. Está claro que la democracia no

2. R. Córdova Macías y M. Cruz, *La cultura política de la democracia en El Salvador, 2004*. San Salvador, 2005.

llega por decreto. Su arraigo y pervivencia deben ser asumidos de forma intersubjetiva por los ciudadanos y sostenidos, día a día, por la confianza en las instituciones, el respeto a las leyes, la tolerancia y la participación de todos y todas.

Mientras no se asuma el problema del comportamiento político de los salvadoreños y las salvadoreñas como un problema de cultura política, sus factores explicativos se buscarán en fenómenos de tipo coyuntural, como la manipulación publicitaria, el engaño o los intereses de las clientelas. Enfocado el problema desde la cultura política, la perspectiva coyuntural tiene que ceder su lugar a una reflexión sobre los valores, las creencias y las actitudes políticas, desde las cuales se alimentan los comportamientos electorales. La identificación de esos valores, creencias y actitudes permitiría comprender mejor el comportamiento político de la ciudadanía. Derivadamente, se podrá juzgar si esos valores, creencias y actitudes forman parte de una cultura política democrática o, más bien, son expresión de una cultura política de tipo autoritario. Algunos de los rasgos de la cultura política salvadoreña son poco democráticos y muy autoritarios y conservadores.

En definitiva, la construcción de un ordenamiento democrático se juega en dos planos: el de las concreciones institucionales y el de los compromisos ciudadanos. Es decir, sin un entramado institucional sólido, que garantice la transparencia electoral, la revocación de los mandatos, la competencia política justa y la participación ciudadana, no puede haber una democracia consolidada. Tampoco la puede haber sin una ciudadanía comprometida intersubjetivamente —desde sus valores, creencias y opciones— con las exi-

gencias de la democracia. En el país, finalizada la guerra civil, se pensó que todo estaba a punto para comenzar la andadura democrática. El optimismo, sin embargo, duró poco. Pronto se vio que las instituciones llamadas a apuntalar la democratización —el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, etc.— no trabajaban a su favor, sino para responder a intereses particulares. Pronto se vio que las instituciones llamadas a garantizar la transparencia (Corte de Cuentas), la seguridad (Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República) y la legalidad y los derechos ciudadanos (Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) no eran capaces de cumplir con su cometido. Al finalizar la década de 1990, el optimismo había desaparecido. El nuevo milenio comenzó sumergido en el pesimismo. A la prácticamente insuperable debilidad institucional se añadió otro elemento preocupante. Pese al tiempo transcurrido desde el final de la guerra, una gran parte de la población conservaba valores políticos forjados antes de ella, a los cuales se añadieron otros. De esta forma, todos juntos estimulan comportamientos políticos reñidos con los valores y las normas de la democracia.

Por lo dicho, los derroteros del país, en materia política, son inciertos, como lo son también en materia económica y social. A medida que pasa el tiempo, se incuban y echan raíces prácticas y valores que harán más difícil encauzarlo por la senda de un Estado democrático de derecho. Ojalá que cuando se quieran erradicar esas prácticas y valores, no sea demasiado tarde.

San Salvador, 3 de abril de 2006.